

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO TREINTA DE FAMILIA**

**Bogotá D. C., ocho (08) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)**

**Rad: 11001-31-100-30-2021-00574-00**

**Clase de proceso: Acción de Tutela**

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a por HENRY LADINO DÍAZ en calidad de Representante legal de MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S. identificada con NIT 900.682.543-8, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES.

**ANTECEDENTES**

El señor HENRY LADINO DÍAZ inicia acción de tutela contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, por considerar que se le está vulnerando el derecho fundamental de petición a la sociedad MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S. identificada con NIT 900.682.543-8.

**HECHOS Y PRETENSIONES**

Expone el accionante que el 09 de julio del año 2021, mediante radicado No.2021\_7795053, MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S. presentó derecho de petición ante la entidad accionada, con el fin de que la entidad iniciara el trámite y reconocimiento de la pensión de vejez de la señora PATRICIA ROMERO PEÑA.

Dentro de las peticiones elevadas se solicitó a la entidad accionada se sirviera dar trámite y reconocimiento de la pensión de vejez de la señora PATRICIA ROMERO PEÑA; en caso de no proceder el trámite solicitado se informara a que prestación del sistema general de seguridad social en pensiones tiene derecho la señora PATRICIA ROMERO PEÑA; de proceder alguna de las prestaciones del sistema, enviar requerimiento a la señora PATRICIA ROMERO PEÑA para que inicie el trámite de reconocimiento de su pensión de vejez; se indicara el número de semanas de cotización de la señora PATRICIA ROMERO PEÑA; y que los requerimientos y comunicados remitidos por la accionada a la sociedad accionante sean puestos en conocimiento de la señora PATRICIA ROMERO PEÑA.

Indica el accionante que a la fecha han transcurrido más de 30 días hábiles desde que se radicó el derecho de petición sin que la accionada haya dado respuesta y tampoco ha informado los motivos por los cuales ha presentado retrasos en la contestación situación que configura una vulneración al derecho de petición.

## **PRUEBAS**

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

- Certificado de Existencia y Representación Legal de MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S.
- Copia del Derecho de Petición elevado ante la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES el 09 de julio de 2021, bajo el radicado 2021\_7795053.

## **ACTUACIÓN PROCESAL**

1.- Admitida la tutela el 27 de agosto de 2021, se ordenó la notificación de la convocada, para que en término de dos (2) días se pronunciaran sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 30 de agosto de 2021, se notificó a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, dio contestación a la acción constitucional.

## **CONTESTACIÓN de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES.**

La entidad accionada refirió: “Revisadas las bases de datos y aplicativos de esta entidad, así como el histórico de trámites de la afiliada, se logra evidenciar que dentro del expediente obra solicitud de reconocimiento de pensión de vejez, radicada el 09 de Julio de 2021, bajo el radicado 2021\_7795053, la cual se encuentra siendo tramitada y validada por el área correspondiente, dentro de los términos establecidos para dar una respuesta de fondo.

Ahora bien, es necesario aclarar que la acción de tutela no es el mecanismo indicado para perseguir este tipo de pretensiones de carácter económico, toda vez que se desconoce la subsidiariedad establecida por la normatividad, a la acción de tutela.

(...)

En tratándose del reconocimiento y pago de prestaciones del sistema de seguridad social, la legislación no estipuló para algunos casos, un término específico que permita identificar de manera clara y detallada el periodo con el cual cuenta la administración para definir la situación planteada por los ciudadanos.

El tema ha sido discutido en varias sentencias de la Corte Constitucional en la medida que no pueden aplicarse los términos normales de una petición por todo lo que implica el estudio de reconocimiento de prestaciones, por lo que en sentencia T-774 de 2015 señaló:

“La sentencia SU-975 de 2003 mediante una aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 estableció un término general de 4 meses para responder las solicitudes de prestaciones económicas en las hipótesis no reguladas expresamente por el legislador. Las leyes 100 de 1993, 171 de 2001 y 700 de 2001 regularon los términos para responder las solicitudes de pensión de vejez y sobrevivientes. Los plazos de contestación de las prestaciones económicas pensionales son los siguientes:

(...)

Sin embargo, como en precedencia, a lo largo del tiempo se pudo establecer que no todas las circunstancias se encuentran aquí acogidas, razón por la que a través del artículo 22 de la Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 1755 de 2015, el legislador señaló:

ORGANIZACIÓN PARA EL TRÁMITE INTERNO Y DECISIÓN DE LAS PETICIONES. Las autoridades reglamentarán la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver, y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.

Cuando más de diez (10) personas formulen peticiones análogas, de información, de interés general o de consulta, la Administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación, la pondrá en su página web y entregará copias de la misma a quienes las soliciten.

Así las cosas, Colpensiones en uso de sus facultades y conforme a lo señalado en el artículo anterior, profiere la resolución 343 de 2017 a través de la cual se establece, entre otros, lo siguiente:

Prestación- Petición- Otros trámites	Término legal		Término (para atención prioritaria)	
	Para resolver	Incluir en nómina	Tiempos públicos	Tiempos privados
Pensión de vejez (indemnización sustitutiva)	4 meses (Art. 33 de la Ley 100/93 modificado por el art. 9 de la Ley 797/03.	6 meses (Art. 4 de la Ley 700/01, SU-975 de 2003 y T-774 de 2005)	4 meses y una semana con inclusión en nómina	3 meses con inclusión de nómina

Pensión de invalidez (indemnización sustitutiva)	SU-975 de 2003 y T-774 de 2015)			
Prestaciones que no tienen término legal (auxilio funerario, pago de incapacidades, emisión de dictámenes de pérdida de la capacidad para laborar, pago a herederos)		N/A		
Pensión de sobrevivientes (indemnización sustitutiva)	2 meses (Art. 1 de la Ley 717/01, T-774 de 2015)	6 meses (Art. 4 de la Ley 700/01)	3 meses con inclusión de nómina	

Por lo expuesto, no puede tenerse por vulnerado el derecho de petición, teniendo en cuenta que tal como ha sido señalado por la Corte Constitucional, el “derecho fundamental a la petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, tiene un núcleo esencial complejo que se integra por la facultad i) que tiene una persona de presentar peticiones respetuosas, en interés general o particular, ante las autoridades y también ante organizaciones privadas, previa reglamentación del legislador y los deberes correlativos del sujeto pasivo de ii) recibir la petición, iii) evitar tomar represalias por su ejercicio, iv) otorgar una “respuesta material”, v) dentro del plazo dispuesto legalmente, y vi) notificarla en debida forma.”, razón por la que estando dentro del término, Colpensiones está a tiempo de emitir y notificar la respuesta correspondiente.

En conclusión, debe tenerse en cuenta, que la solicitud del accionante versa sobre el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue radicada el 09 de Julio de 2021 y de conformidad con lo señalado anteriormente, Colpensiones a la fecha se encuentra en términos para dar trámite a la solicitud, es decir que no ha transcurrido el término para dar respuesta de conformidad con lo enunciado anteriormente, por lo que la acción de tutela debe ser declara improcedente.”

**CONSIDERACIONES**

**Aspectos preliminares**

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

### **Naturaleza jurídica de la acción de tutela**

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

### **Procedencia de la acción de tutela.**

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”*.

En el caso bajo examen, el ciudadano HENRY LADINO DIAZ quien actúa en calidad de Representante legal de MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S., identificada con NIT 900.682.543-8, se encuentra legitimado en la causa por activa para interponer la acción de tutela, en virtud del citado postulado constitucional.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES es la entidad administrativa a quien se le aduce la vulneración del derecho invocado y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

### **Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado**

## **DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN**

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

*“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.*

*El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).*

*La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.*

*Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la repuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94)*

## **Problema Jurídico**

Corresponde a esta Juzgadora determinar si la entidad accionada ha vulnerado el derecho fundamental de petición invocado por el accionante.

## **CASO CONCRETO**

En la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 86, la acción de tutela, fue erigida como un instrumento de protección ante las autoridades judiciales, siendo subsidiaria, residual y autónoma, permitiendo el control constitucional de las acciones u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares. De contera, que jurisprudencialmente se ha decantado que la Acción de tutela, ostenta al menos cinco funciones importantes:

1. Proteger de manera residual y subsidiaria los derechos fundamentales de los habitantes frente a las acciones u omisiones de las autoridades públicas o de los particulares que puedan violarlos.
2. Afianzar y defender de manera coherente y ordenada, la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica.
3. Actualizar el derecho legislado, en especial el derecho preconstitucional, orientado a todos los servidores públicos para que lo interpreten y apliquen a la luz del derecho constitucional.
4. Unificar la interpretación sobre el alcance de los derechos fundamentales.
5. Promover una cultura democrática fundada en la protección efectiva de los derechos de las personas y en los valores del Estado social y democrático de derecho.

Ahora bien, esta especial figura está reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, consagrando en su Artículo 6º, las causales generales de improcedencia que tienden a racionalizar el uso de la acción, y que supeditan su viabilidad a la no existencia de otro medio de defensa judicial salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio *iusfundamental* irremediable.

Del caso concreto, advierte el Despacho, que el accionante HENRY LADINO DIAZ en calidad de representante legal de MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S., radicó el 09 de julio de 2021, derecho de petición dirigido a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, solicitando entre otras cosas, se iniciara el trámite y reconocimiento de la pensión de vejez a la señora PATRICIA ROMERO PEÑA.

Ahora bien, se tiene conforme a la contestación allegada por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, que la entidad aún no ha dado respuesta al Derecho de Petición incoado al encontrarse dentro del término establecido para resolver las peticiones de reconocimiento de prestaciones como la pensión de vejez, conforme a lo regulado por la accionada en la Resolución No.343 de 2017 y jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional.

Pese a lo anterior, advierte el Despacho que si bien la entidad accionada refiere en su escrito de contestación los motivos por los cuales no ha dado respuesta de fondo a la petición impetrada por el accionante y que se encuentra dentro de los términos establecidos para resolver lo pertinente respecto al reconocimiento de la pensión de vejez de la señora PATRICIA ROMERO PEÑA, igualmente le corresponde a la entidad accionada poner en conocimiento de los usuarios los términos con los que cuenta para resolver las peticiones relacionadas con el reconocimiento de prestaciones tales como la pensión de vejez, y con ello evitar que se recurra a elevar acciones constitucionales, a efectos de recibir una respuesta de fondo o conocer el trámite dado a las peticiones.

Esto como quiera que una petición no se considera debidamente tramitada con su recepción pues por mandato constitucional la entidad ante quien se haya elevado la solicitud está en la obligación de proveer al ciudadano de una respuesta sobre sus deprecaciones, entonces, de no cumplirse con estos supuestos, el juez constitucional, estará en la obligación de requerir a quien vaya en contravía del derecho fundamental para que entre a resolver de manera inmediata el asunto objeto de pedimento, como lo ha reiterado la H. Corte Constitucional en Sentencia T-523/10 de la siguiente manera.

“... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: **1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario...**” (subrayado por el Despacho).

Así las cosas, y sin más consideraciones se tutelaré el derecho de petición, y en consecuencia se ordenará a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES para que dentro del término de cuarenta y ocho horas (48 h.) contadas al recibo de la respectiva comunicación, proceda a indicar al accionante el trámite dado a su petición, las razones por las que aún no se ha resuelto y el término con el que cuenta la entidad para resolver de fondo la solicitud elevada, conforme a lo manifestado en el escrito de contestación que se allegó, y remitir copia de la misma a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991.

**EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

### **RESUELVE**

**PRIMERO:** Tutelar el Derecho de Petición a **MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S.**, representada legalmente por el señor **HENRY LADINO DIAZ**, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Ordenar al director de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES**, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas (48 h.) contadas al recibo de la respectiva comunicación, proceda a poner en



conocimiento el trámite dado al derecho de petición radicado por el señor **HENRY LADINO DIAZ**, en calidad de representante legal de **MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S.** identificada con **NIT 900.682.543-8**, indicándole las razones por las que aún no se ha resuelto la solicitud y el término con el que cuenta la entidad para resolverla de fondo, procediendo a notificar al accionante al correo electrónico suministrado en su derecho de petición, y debiendo remitir copia de las referidas diligencias a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991. **Oficiese.**

**TERCERO:** Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

**CUARTO:** Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

**QUINTO:** Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

**NOTIFÍQUESE,**

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS  
JUEZ**

**Firmado Por:**

**Viviana Marcela Porras Porras  
Juez  
Familia 030  
Juzgado De Circuito  
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**8bf4c14c3b636584082f01be58b2dd987c5b82c9d3f97ce1686b106ed46fadd8**

Documento generado en 08/09/2021 12:51:56 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**